

Prevalidas de su situación de monopolio, cuya constitución todos sabemos cómo se verificó, las Compañías Eléctricas han apretado el cerco que le tienen puesto a los intereses nacionales, para lograr nuevos contratos, ajustados a sus pretensiones.

El representante de esas compañías. Mr. Reed, quien hace unos pocos meses declaró por la prensa que era tal la buena voluntad que animaba a las compañías que si la Junta lo deseaba en pocas horas se podía llegar a un arreglo, es quien ahora declara que es inútil seguir adelante en la discusión de los proyectos de contrato en tanto la Junta no acepte de plano toda una serie de cláusulas, solamente ventajosas para los intereses que él defiende. El gato al fin sacó las uñas y parece no estar dispuesto a a que se las recorten.

Las Compañías exigen que se las autorice para suspender los servicios eléctricos en caso de contrabando; que no se les imponga en el futuro ninguna clase de tributos, ni nacionales ni municipales; se nos dice que las famosas compañías no pagan al municipio de la capital los tributos legales; que se las autorice para mantener tarifas de acuerdo con las fluctuaciones del cambio, de modo que nunca puedan ellas perder por este concepto; es decir piden garantías y más garantías para ellas y añaden que sólo a ha-

se de la obtención, de esas garantías instalarán nuevas plantas generadoras de energía eléctrica.

Para lograr impresionar al público la táctica de las Compañías que ya nosotros delatamos desde hace muchos meses, ha sido la de sembrar el descontento entre los consumidores, para que éstos presionen a la Junta: primero no concediendo más fuerza eléctrica a los nuevos solicitantes; segundo, instalando medidores; se nos dicen que se instalan de 30 a 100 medidores por día; y tercero concediendo aumento de fuerza a aquellos clientes que piden se les instale el medidor.

La Junta Nacional de Electricidad está pues en una posición definitiva frente a las Compañías y debe resolver con claridad su política. O las Compañías aceptan los contratos que la Junta propone, que han de ser estructurados conforme a una política de bien social, o en caso contrario, como parece que está sucediendo, debe la Junta prescindir de los servicios de las Compañías. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho, ya lo propusieron nuestros diputados en la cámara: el camino a seguir es expropiar a las Compañías mediante indemnización. Esta es la situación. ¿Se atreverá el actual gobierno a ponerle el cascabel a este gato?

Si la mayoría de la Junta es progresiva, porque en su

Pasa a la sexta página



San José, 9 de Enero de 1938

Editor E. Jiménez G.

Nº 273

EDITORIAL

Por encima de los intereses de media docena de bananeros deben estar siempre los más grandes intereses de la República

El problema más importante que tiene planteado en este momento el país, es el que se relaciona con la construcción del muelle de Quepos.

Declaramos sin titubeos que el Poder Ejecutivo tuvo una actuación brillante en sus primeras negociaciones con la United con respecto a la construcción del muelle: se ajustó a los mandatos de la respectiva ley y defendió la soberanía nacional. Pero en la actualidad, la actitud del Poder Ejecutivo nos resulta confusa y por consiguiente, peligrosa. Presionado por un trío de bananeros, amigos incondicionales de la United, consintió en que se celebrara en la Casa Presidencial una reunión irregular de diputados y de bananeros, y en que esa reunión acordara, de manera humillante para la república, la reapertura de negociaciones que la Compañía, en forma insolente pero bien calculada había declarado definitivamente terminadas. Y con tal acuerdo estuvo conforme el señor Presidente después de haber manifestado de manera categórica que la ley en vigencia no permite que se le hagan a la United más concesiones que las que él estuvo de acuerdo en ha-

cerle. Si así piensa el Presidente de la República, ¿a qué se apoya para reabrir las negociaciones? ¿Es por ventura la ley ha sido modificada? ¿Es que está dispuesto a pasar por encima de la ley? Porque la United no llegará a ningún acuerdo—ya lo dijo—si no es a base de que se acceda totalmente a sus caprichos.

Hacemos un enérgico llamamiento a la opinión pública en este momento delicado de la vida nacional. Es indispensable que el pueblo de Costa Rica reaccione y se apreste a darle apoyo o repudio a los hombres que lo gobiernan. Un grupo reducido de bananeros, que de acuerdo con la compañía frutera se metieron a hacer fiacas en lugares de donde los bananos no podían ser sacados para la exportación por falta de un puerto marítimo habilitado, no tiene derecho a exigirle al país humillantes concesiones de dignidad y de riqueza para una Compañía que en el último siglo no ha hecho otra cosa que piratearnos.

Excitemos al Presidente de la República a mantener su primitiva actitud, que es la que más conviene a Costa Rica. El Presidente de la República debe comprender que las amenazas de la United no son otra cosa que artimañas para conseguir integralmente lo que desea.

Debe darse cuenta además de que por encima de los intereses de media docena de bananeros, tienen que estar siempre los grandes intereses de la República.

De cómo el Gobierno de Colombia - presidido por un

hombre honrado y valiente - ha procesado y encarcelado a funcionarios y abogados de la United Fruit Company en ese país

La situación

La United Fruit Co. tiene inmensas plantaciones de banano en la región de Santa Marta, provincia de Magdalena, en Colombia. Es dueña de esa región no sólo de las tierras, sino de los medios de transporte, ferrocarriles, muelles, y de los sistemas de irrigación, de vital importancia para el cultivo. Es dueña de todo.

Su negocio está garantizado por contratos que, como todos los que ha venido celebrando con los países del Caribe, están basados en la ignorancia de los gobiernos, o, en otras ocasiones, en la venalidad de los mismos, y que le permiten la organización monopolística absorbente, que le da la posición, dentro de estos países casi de un estado dentro de otro estado.

Allá en Colombia la Frutera no le da valor humano al peón, lo tiene mal pagado, lo obliga a recibir vales o chapas para explotarlo más en los comisariatos de su propiedad, en donde se ve obligado a comprar a precios excesivos; lo tiene viviendo en campamentos antibigiénicos, sometido a las enfermedades tropicales, sin médico, medicinas ni hospitales. Fue esta situación de esclavitud la que dió origen en el año 28 a la huelga bananera que terminó con la masacre de trabajadores asesinados por el ejército colombiano.

En esa misma zona hay una gran cantidad de bananeros del país, entre los que pueden distinguirse dos tipos: los que desean progresar independientemente, engrandecer la industria sin dejar la riqueza en manos de la United, y los otros, un pequeño número, los consentidos de la

United, individuos entregados a la Compañía, que les reconoce toda suerte de ventajas, en los precios de la fruta, en el transporte de sus bananos y todo, a cambio de su docilidad; son estos descastados los que usa la Compañía para hacer presión en la opinión pública cuando se discuten sus contratos o cuando se intenta que cumpla los establecidos.

La nueva política anti imperialista del Presidente López

El Gobierno del Presidente López, con visión del futuro del país, e ha propuesto meter en cintura a la United, exigirle que cumpla sus contratos, que respete las leyes colombianas, y sobre todo, impedirle que con sus métodos de extorsionismo entorpezca el desarrollo de la industria bananera nacional. Para llevar a cabo su programa ha sentado el precedente de que el Estado intervenga directamente en la industria bananera, a fin de que el colombiano que a ella se dedica esté justamente amparado y no se vea sujeto al arbitrio malévolo o caprichoso de la United, que no quiere rivales en sus dominios.

Los entreguistas y los descastados rompen fuegos contra la actitud altamente patriótica del Presidente López

Al presentarse en el Senado de Colombia el proyecto de ley para que el Estado interviniere directamente en el negocio de los bananos, medida que iba contra el monopolio insolente e injusto de la United, ésta reaccionó violentamente. Todos sus aliados, los bananeros consen-

dos, los abogados que tiene a su servicio, los periodistas comprados, los personajes y personajes cotizables, levantaron la voz contra tal medida, enmascarados con la máscara de un falso patriotismo y diciendo que la United se iba de Colombia y además acusando al gobierno de estar fomentando una huelga en la zona bananera con el objeto de entorpecer el Gobierno de su sucesor. Ante esta acusación que le fue lanzada en el Senado, el Presidente López ordenó hacer una investigación, pedida por medio de su Ministro de Industria, Antonio Rocha, a fin de que se sentaran responsabilidades; la investigación debía extenderse a las actividades de la United en Santa Marta.

Las cosas se ponen en claro

Los resultados de esta investigación que aun está verificándose y que han producido en Colombia un gran revuelo, porque es la lucha entre el Gobierno y la poderosa Compañía, van siendo los siguientes: el Gobierno comprueba que la United invirtió \$200,000 en el soborno de personajes políticos cuyos nombres fueron dados en pleno Senado; que muchos de los artículos de los contratos vigentes no se cumplían; que varias autoridades de la zona bananera no cumplían con su deber y permitían a los Agentes de la Compañía hasta cometer crímenes con los trabajadores, sin merecer sanción legal alguna; que en las oficinas de la Santa Marta Fruit Co., ahijada de la United, aparecieron documentos sustraídos de las oficinas públicas, en los cuales había testimonios de cohecho.

La energía del gobierno se impone

Para realizar todas estas investigaciones, el Gobierno comisionó al Dr. Alfredo Navia, quien actuó en Santa Marta. Allí mandó a detener a Mr. G. Bennet, el Apoderado de la Santa Marta Fruit Co., lo mismo que al Dr. Carlos Gómez, Abogado de dicha Compañía, y los tuvo incomunicados mientras practicaba las diligencias legales. Como se ve, los colombianos no tienen complejo de inferioridad y hacen respetar y cumplir sus leyes. El señor Navia selló las oficinas de la Compañía y realizó inspecciones en sus documentos, libros archivos y aun exigió la apertura de su caja fuerte. Y estos con la alarma consiguiente de todos los yanquis y con la alharaca de todos los sometidos que se escandalizaban de que el Gobierno soberano ajustado estrictamente a la ley, estuviera haciendo lo que debía hacer.

Amenazas de la Compañía

La United ha puesto el grito en el cielo y ha amenazado con abandonar sus negocios bananeros en Colombia; el Dr. Antonio Rocha ha declarado que la Compañía tiene invertido en sus negocios un capital de unos 9 millones de pesos a más de sus concesiones en muelles y ferrocarriles y que no es de suponer en buena lógica que los pierda así por que si, retirándose de Colombia. Los timoratos han hablado de la ruina de la industria bananera, si la United llegara a retirarse del país; el Gobierno sigue adelante y confía que de esta vez meterá en cintura a la compañía, y todo en bien del ver.

Pasa a 6a. página

Nuestro criterio frente al incidente del General Pinaud con el Presidente de la República

Juzgamos de nuestro deber decir lo que pensamos de la intervención de un sobrino del Presidente de la República en la polémica que habían venido sosteniendo este funcionario y el general Pinaud. Director de «La Tribuna».

De plano declaramos que el pedimento de boicot para «La Tribuna» que hace el señor Fernández a los empleados públicos es un atentado a la libertad de prensa en Costa Rica y merece la más enérgica repulsa del país.

En «La Tribuna» y en «Novedades» se publican constantemente ataques—las más

de las veces injustos—contra nuestras convicciones políticas y económicas. Sin embargo, para nosotros, la libertad de prensa en Costa Rica tiene que estar por encima de las pasiones y de los individuos.

Ni al Presidente de la República ni a su sobrino les desconocemos el derecho de defenderse y atacar.

Más todavía, sentimos que el general Pinaud, en sus artículos tuvo pasajes demasiado violentos y hasta teñidos de injusticia. Pero eso no puede justificar nunca la actitud del señor Cortés apoyando incondicionalmente a su sobrino.

El Ministro Zúñiga Montúfar, aliado de los Pozuelos que en Costa Rica defienden la traición militar española

Un tal Pozuelo—fabricante de galletas cuyo nombre le sirve de seudónimo no sabemos a qué gacettillero partidario de los generalotes que están traicionando a España—se dirigió al Ministro de Relaciones Exteriores

preguntándole si don Antonio de la Villa ocupa el cargo de Ministro de España en Costa Rica. El Ministro le contestó en el acto que no, que el señor de la Villa no tiene tal calidad en Costa Rica. Pasa a la 6a. página